



Medellín, veinticuatro (24) de noviembre dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JORGE ALBERTO CARVHALO BETANCUR
DEMANDADO: COLPENSIONES
PROCEDENCIA: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO: 05001-31-05-006-2017-00573-01

En el presente proceso ordinario laboral de primera instancia presentado por el señor **JORGE ALBERTO CARVHALO BETANCUR**, quien fue sucedido procesalmente por su hijo **JORGE JUAN CARVHALO GIRALDO** y por su cónyuge **MARTHA CECILIA NAVARRO RAMÍREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, la apoderada de la parte actora Dra. DIANA MARCELA GONZÁLEZ SUAREZ, mediante escrito, manifiesta que solicita la aclaración, corrección y adición de la sentencia de segunda instancia, afirmando textualmente lo siguiente:

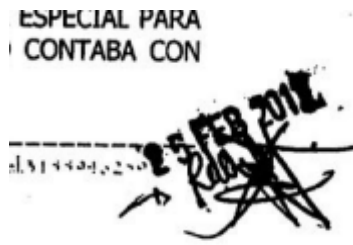
“Es cierto, como lo señala la sala que, en la audiencia al momento de interponer el recurso, se manifestó que la prescripción se había interrumpido con la reclamación administrativa radicada el 12 de junio de 2012, pero también es cierto, que dicha manifestación obedeció a un lapsus que tuvo la suscrita al momento de referenciar la fecha.

No obstante, dicho lapsus no puede ser impedimento para que el juez en su deber de buscar la verdad material y jurídica, revise lo que efectivamente se encuentra probado en el proceso.

En primer lugar, ha de decirse que, desde la presentación de la demanda, se manifestó en el hecho octavo la fecha en la que se presentó la reclamación administrativa, así:

OCTAVO: Con el convencimiento de acreditar los requisitos para la Pensión Especial de Periodista, el 12 de febrero de 2012 se presentó nuevamente reclamación solicitando pensión en calidad de periodista.

Hecho que se sustentó con la correspondiente prueba, que reposa de folios 22 a 27 del expediente físico, y que se puede corroborar con el expediente digital; escrito que tiene consignado el sello así:



No puede desconocer el Tribunal, que el ISS no manejaba los formatos como los ha dispuesto hoy Colpensiones.

Así mismo, se señala que Colpensiones al momento de contestar la demanda, lo aceptó como cierto:

OCTAVO Y NOVENO: Es cierto que solicitó nuevamente la prestación y le fue negada mediante Resolución GNR 113518 del 28 de mayo de 2013.

Dicha prueba tampoco fue tachada en la etapa procesal correspondiente y pese a que en la Resolución no se indica la fecha en que fue presentada, ello por sí, no le resta credibilidad a la prueba aportada por la suscrita.

De lo anterior se desprende que la fecha de reclamación administrativa que interrumpió la prescripción se encuentra plenamente acreditada dentro del proceso y en ello se sustenta la solicitud que respetuosamente se formula en el presente memorial."

Respecto de la anterior solicitud, se recuerda que, la aclaración de la sentencia procede cuando existan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella; la corrección, se da bien cuando en la providencia se haya incurrido en error puramente aritmético o bien en aquellos casos de error por omisión o cambio de palabras o alteraciones de éstas, siempre que igualmente estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella; y, por último, la adición se presenta cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis, así como de cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento.

En los anteriores eventos las opciones son puntuales, concretas y restrictivas, quedando claro, que **la sentencia no puede ser revocada ni reformada por el mismo juez que la pronunció.**

En este punto es pertinente citar la obra *"Teoría General del Proceso"*¹, ya que los tratadistas distinguen las anteriores situaciones así: **"Revocarla"** es dejarla totalmente sin efecto, bien sea reemplazándola por otra resolución o mandato o simplemente derogándola por improcedente. **Reformarla** es modificarla. Dejar vigente una parte y sin efecto otra que generalmente es sustituida por un contenido jurídico diverso. (...)"

¹ Beatriz Quintero, Eugenio Prieto, 3ª edición, p. 554.

Examinada la situación que se suscita con la decisión de segunda instancia proferida por esta Sala de Decisión Laboral el pasado 22 de septiembre de 2022, se encuentra que, aun admitiéndose que puede existir una imprecisión respecto de la prueba que da cuenta de la fecha de presentación de la reclamación administrativa, no le sería prudente a esta Sala propiciar un nuevo error tratando de enmendar otro anterior, so pena de incurrir en un desconocimiento flagrante de la ley procesal, que, como tal, por ser de orden público, es, en los términos del artículo 13 del Código General del Proceso -CGP-, de obligatorio cumplimiento y en ningún caso sus disposiciones podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Es claro entonces que, al momento de analizar el tema de la prescripción en este proceso, se dijo en la parte considerativa que: *“...Si bien el actor expone que la prescripción se interrumpió con la reclamación administrativa radicada el 12 de junio de 2012, lo cierto es que no obra en el plenario prueba alguna de la fecha en que el demandante reclamó por segunda vez la pensión especial de vejez, motivo por el cual, aunque la sala debe dar por cierta la existencia de una reclamación previa, en atención a la referida Resolución GNR 113518 del 28 de mayo de 2013, al no existir prueba de la fecha de reclamación de la misma, se tendrá como fecha de interrupción del término de prescripción, el 28 de mayo de 2013, fecha de la referida resolución...”*, esta decisión no puede ser modificada como ya se explicó.

Pero, es más, título de mero comentario, es decir sin que se razón para decidir, si existiera posibilidad jurídica de modificar la sentencia, no podría ser reformada con base en los argumentos de la solicitud del demandante, pues no está probado que el actor haya presentado reclamación de la pensión el 12 de febrero de 2012, suponiendo que fue un error la mención que se efectuó al interponer el recurso de haberla incoado el 12 de junio de 2012, toda vez que en el sello de la reclamación que se alude, lo único que se alcanza a leer es **25 de febrero**, pues el ultimo dígito del año es totalmente ininteligible, sin que se pueda suponer que es 2012.

Con todo, si se tomar en cuenta la aludida reclamación suponiendo que se presentó en el año 2012, tampoco habría lugar a modificar la sentencia en favor del demandante, pues tal documento traería como consecuencia, que se tuviera que tener probado que el actor efectuó una primera reclamación de la pensión el 30 de junio de 2005, como en la pretendida reclamación se anota, con la que interrumpía por primera vez la prescripción, por lo que la segunda reclamación que se aduce sin prueba haberse presentado el 12 de febrero de 2012 no tendría la virtud de interrumpir nuevamente la prescripción, toda vez que a la luz del Art. 489 del CST, la reclamación de un derecho

que se tiene causado, solo interrumpe la prescripción por una sola vez, lo que no impide insistir administrativamente realizando nuevas reclamaciones administrativas del derecho, pero estas no interrumpen nuevamente la prescripción, sino la presentación de la demanda.

En conclusión, sea que errada o no la conclusión a la que llegó esta magistratura en la sentencia de segunda instancia, su remedio solo sería viable, eventualmente, a través de los recursos de ley pertinentes, pues, se reitera, no observa la Sala en la decisión un contenido que ofrezca duda, -en los términos de los artículos 285 a 287 del CGP-; por tanto, lo advertido respecto a que se *“aclare, corrija o adicione”* lo relativo a la fecha de presentación de la reclamación administrativa y su consecuencia con respecto al tema de la prescripción en la forma en que fue decidida, significaría, ni más ni menos, una reforma a la sentencia, situación que, resulta inviable desde el punto de vista rigurosamente jurídico.

En consecuencia, en atención, precisamente al contenido de los citados artículos del CGP, no es viable proceder con la solicitud elevada por la apoderada del accionante de aclaración, corrección o adición de la sentencia de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de aclaración, corrección y adición de la sentencia dictada el pasado 22 de septiembre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **JORGE ALBERTO CARVHALO BETANCUR**, en contra de **COLPENSIONES**, según las consideraciones que anteceden.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Los magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **213** del **25 DE NOVIEMBRE DE
2022**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bfa98dc8c59225b61b1fe8c364382afe65c5fbd479e37f88bf57d00d50c35be0**

Documento generado en 24/11/2022 02:02:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>